

General de la Seguridad Social de Melilla recurso de alzada contra la resolución antes mencionada, acompañada del justificante de ingreso de las actas recurridas, y con fecha de salida 12-7-99 el expediente fue remitido por dicha Unidad a esta Dirección General, habiendo tenido entrada en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 16-7-99.

Tercero.- En los escritos de recurso la recurrente solicita la anulación de las actas, ratificándose íntegramente en sus escritos de alegaciones de 25 de febrero y 25 de mayo de 1999, que obran en el expediente, y añadiendo, en síntesis, lo siguiente:

En primer lugar, se dice, que teniendo en cuenta que las liquidaciones impugnadas deben tener su fundamento en la constatación de un hecho concreto como es "la existencia de un fraude contractual basado en la supuesta celebración incorrecta de un contrato de formación en el trabajo", y dado que sobre esta cuestión tiene que pronunciarse la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como consecuencia del recurso de suplicación planteado por la recurrente, "sería muy racional "proceder a la suspensión tanto del procedimiento sancionador derivado del Acta de Infracción de Trabajo 7/99 extendida por los mismos hechos como del procedimiento liquidatorio derivado de las actas AL 1/992/99 hasta que tenga lugar el pronunciamiento judicial esperado.

Independientemente de lo anterior, en cuanto al fondo del asunto, señala la recurrente que al no estar presente en el momento de la visita al centro de trabajo "...ni el empresario ni representante alguno del mismo. "todas las manifestaciones reflejadas en las actas proceden de la propia denunciante (Dña. Noelia Leyva Muñoz) o de la dependiente Dña. M.ª Isabel García Pastor. Incluso se añade que "...las manifestaciones hechas por el empleado de la Asesoría Melillense, al presentar en las locales de la Inspección la documentación no proceden de persona alguna con responsabilidad organizativa ni de dirección empresarial, sino de un centro que limita su actuación a gestionar cuestiones de, índole meramente administrativa."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 313 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 294-94), en la redacción dada por la Disposición adicional quinta, punto 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 15-11-97), en relación con la Disposición transitoria única, punto 4, del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (BOE 3-6-98) y el artículo único de la Orden de 12 de febrero de 1998 sobre el ejercicio de las funciones de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 14-2-98).

Segundo.- En cuanto a los motivos de impugnación, debe señalarse lo siguiente:

Respecto al primer motivo de los alegados, debe rechazarse, por cuanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de ejercer su competencia, dispone de capacidad investigadora y calificadora sin que sea necesaria la previa calificación o intervención de la Jurisdicción (T.S., Sentencia de 23-5-91).

En cuanto a la cuestión de fondo deben rechazarse también los motivos alegados por la recurrente al no aportar prueba alguna que desvirtúe la presunción de certeza de los hechos consignados en las actas de referencia relativos al incumplimiento constatado por la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social actuante de la obligación empresarial de proporcionar formación teórica, en los términos del artículo 112.e) del Estatuto de los Trabajadores, con las consecuencias previstas en el artículo 11.2.k.) de la indicada norma legal y la imposibilidad, por tanto, de beneficiarse de las especiales condiciones de cotización a la Seguridad Social establecidas para el contrato de formación por la normativa aplicable.